

el Juzgado 2º de 1ª instancia de Veracruz, al 4º de primera instancia de Puebla para conocer de la demanda entablada por el Lic. D. José Bautista, residente en Puebla, contra D. Pedro Juan Velasco, residente en Veracruz, sobre pago de honorarios: lo expuesto por las partes y por los jueces competidores en apoyo de la respectiva jurisdicción: lo pedido ante esta 1ª Sala por el Ministerio Fiscal y todo lo demás que convino, Considerando: que la demanda puesta por el Lic. Bautista, se refiere al pago de honorarios que ha devengado en un juicio seguido entre Velasco y D. Francisco Fernandez Pelicier, cuyo juicio sometido á jueces árbitros se ha estado sustanciando en Puebla: que aunque Velasco esté domiciliado en Veracruz, el fuero del domicilio no es preferente en el caso al del cuasi-contrato que produce un litigio y en virtud del que los litigantes quedan sujetos al juez que conoce de él, pues el punto de costas es accesorio del principal y al juez que conoce de lo accesorio: que como dice Peña y Peña es un principio justificado y natural que: "locus servitii equiparatur loco administrationis," y habiéndose recibido un servicio en un Tribunal, allí mismo se puede obligar á la remuneración; de conformidad con lo pedido por el Ministerio Fiscal y con fundamento de las doctrinas de Peña y Peña, en sus lecciones de práctica forense tomo 2º, lección 11ª, núm. 165 y siguientes y de lo dispuesto por las leyes 4ª tít. 3º, 32, título 2º, partida 3ª y 7ª título 2º libro 11 de la Novis, Se decreta: Primero: que el juez de 1ª instancia de Puebla es el competente para conocer de la demanda sobre honorarios que el Lic. Bautista ha entablado contra D. Pedro Juan Velasco, reclamándole el pago de los devengados en el juicio arbitral seguido en Puebla por medio del apoderado de Velasco, contra D. Francisco Fernandez

Pelicier. Segundo: no hay condenación de costas. Tercero: remítanse las actuaciones al juez de Puebla con copia certificada de esta sentencia, remitiéndose copia igual al juez de Veracruz, para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazón.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Junio 1º de 1872.
—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.—Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por German Correa, contra el Prefecto de Morelia por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El C. German Correa se presenta pidiendo amparo de garantías, por virtud de haberle consignado al contingente el C. Prefecto político de esta ciudad, á pesar de haber justificado su honradez.

Este funcionario en su informe manifiesta: que efectivamente consignó á Correa al contingente por causa de necesidad pública para cubrir las bajas del ejército.

La ley general sobre suspensión de garantías se expresa en estos términos: "Art. 2º La primera parte del artículo 5º, sección 1ª, tít. 1º de la Constitución, quedará en estos términos: "En caso de interés público nacional, todo individuo puede ser obligado á prestar trabajos personales, mediante una justa retribución."

Siendo notorio que la paz pública está trastornada con motivo de la rebelión

de algunos malos ciudadanos que están causando á la patria males inmensos; y que por lo mismo las autoridades encargadas de la conservacion del orden y de la tranquilidad del país, se ven en el caso de obligar á algunos ciudadanos á prestar sus servicios en el ejército nacional mediante la retribucion respectiva; el Promotor Fiscal pide se declare por V. que la Justicia de la Union no ampara al C. German Correa, como lo solicita, por virtud de haber obrado el C. Prefecto de esta ciudad conforme á la ley, y de ser notoria la necesidad que hay de obligar á los ciudadanos á prestar sus servicios en el ejército para la pacificacion de la República.

Morelia, Mayo 27 de 1872.—*Mariano de Jesus Torres.*

Es copia que certifico.—*Isidro Aleman,* escribano público.

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

Morelia, Mayo 29 de 1872.

Visto este juicio de amparo, promovido por German Correa por creer violada en su persona la garantía que otorga el art. 5º constitucional, con la providencia del C. Prefecto de esta capital que lo consignó al servicio de las armas, y considerando que desde el día 30 de Abril próximo pasado cesaron los efectos de la ley de 2 de Diciembre de 1871 que declaró vigente la de 17 de Enero de 1870, que suspendió algunas de las garantías individuales y entre ellas la del art. 5º citado, que por lo mismo desde el primero de este mes entraron todos los ciudadanos en el pleno goce de aquellas. Que aunque la ley de 17 del corriente, continúa el vigor de la de 2 de Diciembre, esta disposicion aún no se publica y sanciona en el Estado y aún cuando ya lo estuviera, la consignacion del quejoso al servicio de las armas no

ha sido hecha conforme á lo prevenido en el art. 2º de la citada disposicion de 17 de Mayo actual, quedando en consecuencia demostrado que la queja de Correa encuentra pleno apoyo en su favor: Se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á German Correa contra la providencia de la Prefectura que lo consignó al servicio de las armas, cuya declaracion está fundada en el artículo 101 de la Constitucion Federal y en los arts. 4º y 27 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869. Hágase saber; remítanse copias de este fallo á quienes correspondan y las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Definitivamente juzgando lo decretó el C. juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz.*—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 29 de 1872.—*Isidro Aleman,* escribano público.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 4 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por German Correa, contra el jefe Político de Morelia que lo consignó al servicio de las armas: apareciendo que la consignacion se hizo en Mayo del presente año en cuyo tiempo no estaba vigente la ley de suspension de garantías: que Correa fué consignado como sospechoso de robo de unos burros al Alcalde 4º del Distrito de Morelia, de cuya autoridad que lo juzgaba por ese delito, fué arrancado por el Gefe Político de Morelia quien lo destinó al servicio de las armas. Considerando: que tanto por no haber estado en Mayo de este año suspenso el goce de garantías individuales reconocido por la Constitucion federal, cuanto por tratarse de una acusacion sometida al

conocimiento de la autoridad judicial, el Gefe Político de Morelia no debió consignar á German Correa al servicio de las armas; pues además de que esto viola las garantías que reconocen los artículos 4º y 5º de la Constitución General, ninguna autoridad política debe quitar de la judicial á los individuos que están sometidos á su juicio ó imponerles una pena, y lo contrario importa la violación de las garantías á que se refieren los artículos 14 y 21 de la misma Constitución; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de ella y en el 4º y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869 se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada, el 29 de Mayo del presente año 1872, por el Juez de Distrito de Michoacan que declara que la Justicia de la Unión ampara y protege á German Correa contra la providencia de la Prefectura que lo consignó al servicio de las armas.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafraqua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 7 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

COMPETENCIA promovida por el Juzgado 3º de lo civil de esta Ciudad al de 1ª instancia de Celaya, para conocer del apeo y deslinde promovido entre las Haciendas de San Cristóbal y las del Mayorgasgo y San José.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: que ha examinado lo bastante estos autos relativos á la competencia que el juez 3º de lo civil de México ha iniciado al de 1ª instancia de Celaya para conocer del juicio que el C. Lic. Muñoz Ledo promueve á D. Justo Carresse, sobre apeo y deslinde de las haciendas nombradas San Cristóbal y San José.

El suscrito entiende, que en el presente caso la competencia del juez de Celaya es innegable, puesto que el C. Muñoz Ledo solo pretende que la autoridad judicial fije los linderos ó señales que marquen su propiedad; es decir, promueve un juicio de apeo, y como quiera que la declaración del juez fijando esos linderos en nada perjudica al derecho que pueda tener Carresse, porque la declaración judicial, en estos casos, no afecta en manera alguna al derecho de propiedad ó dominio que siempre se reserva por disposición de la ley misma. Por eso todos los autores, y entre ellos el que sirve de texto para nuestras escuelas, enseñan, que si durante el apeo ó deslinde algun vecino ó colindante se opone, se asienta esta propuesta en los autos y se le oye luego en juicio ordinario. Esas diligencias de apeo y deslinde son verdaderamente actos de jurisdicción voluntaria, y que emanan por lo mismo de la potestad que tiene el juez de la tierra dentro de su territorio, en las personas y casas que están dentro de él, y en esa virtud, así como tambien por otras razones de utilidad, está reconocido que en los juicios de esta naturaleza el juez del partido, antes que ahora los de 1ª instancia donde estan situadas las heredades, sean los que conozcan y